

# Opinión

## Papá ochentero

**L**A GENERACION del milenio o “millennials”, como se les conoce mas comúnmente, se refiere a quienes nacieron de 1980 en adelante. Es decir, los más maduros de esta generación tienen aproximadamente 35 años.

Los profesionales que se dedican a estudiar el comportamiento de distintos grupos de personas, definen a los “millennials” como personas que les preocupa más el camino que el destino. Es decir, a diferencia de la generación anterior, los jóvenes actuales no están dispuestos a grandes sacrificios hoy para lograr eventuales beneficios en el futuro. Por ejemplo, cuando mis compañeros y yo egresamos de la universidad en 1986, nuestra mayor preocupación era encontrar trabajo. No importaba mucho ni el sueldo, ni el barrio, ni la empresa y mucho menos el ambiente interno en la oficina. En cambio, hoy un “melliannual” que no está conforme con la “pega” no duda en renunciar para buscar una mejor. La consigna sería algo así como “si no estás contento con tu vida, qué esperas para cambiarla”. Muchos de los jóvenes que salen de la universidad ni siquiera buscan trabajo. Primero tienen que darse un tiempo para ellos.

Por cierto este no es un fenómeno que ocurra sólo en Chile; más bien podríamos decir que es un fenómeno propio de los países desarrollados, que también se manifiesta en Chile dado el significativo aumento del ingreso que ha tenido nuestro país en los últimos treinta años. Los “millennials” miran a la generación de sus padres con un poco de lástima. Nuestros padres han vivido apurados. Apurados por trabajar, apurados por casarse, apurados por tener hijos, etc. Todas esas cosas tienen bastante de verdad. Sin embargo, lo que los “millennials” no alcanzan a captar es que para

**José Ramón Valente**  
Economista



vivir como ellos se requiere un papá ochentero, cosa que nosotros no tuvimos y que ellos aprovechan al máximo.

Los papás ochenteros nacimos en un país mucho más pobre y con menos oportunidades que el actual. Vimos a nuestros padres perderlo todo en el gobierno de la Unidad Popular y volver a perderlo todo en la crisis de principios de los ochenta. Esas experiencias nos enseñaron a valorar el trabajo, a ser ahorrativos y a temerle a los imprevistos. Cuando este país se abrió al mundo y creó instituciones que hicieron posible el emprendimiento y el progreso, se encontró con una generación de jóvenes que, gracias a la educación y al ejemplo de sus padres, supo aprovecharlas para generar riqueza y permitir que Chile diera el mayor salto de su historia en materia de progreso económico y social.

Lo que los “millennials” no parecen entender del todo es que sus padres ochenteros les compramos un seguro que les permite andar relativamente despreocupados por la vida. Ellos, por ejemplo, han podido ir a la universidad a la que la mayoría de sus padres no fueron, porque los papás ochenteros ahorraron o se endeudaron para ello. Y en su defecto, pudieron pedir un crédito para pagar la universidad, opción inexistente en los años ochenta.

Así es que la próxima vez que ustedes, los sub 35, se apresten a mirar con una mezcla de lástima y desprecio la vida de sus padres, recuerden que la de ustedes no sería la que es sin el enorme esfuerzo y sacrificio de sus viejos.

**Los “sub 35” o “millennials” pueden vivir sus vidas como les gusta gracias al enorme esfuerzo y sacrificio de sus padres ochenteros.**

## Seamos serios

**V**IVIMOS el momento más difícil desde el inicio de la transición. Nunca había sido tan grande la brecha entre las expectativas generadas durante una campaña y los resultados concretos de la gestión gubernamental, tal cual los percibe la población. Hoy día resulta particularmente cierto eso de que las elecciones se ganan con promesas, pero se gobierna con explicaciones.

A estas alturas nadie al interior de la Nueva Mayoría niega la existencia de serias dificultades. Las posiciones difieren en cuanto a las razones. Es normal que ocurra porque hay muchos factores actuando y se pueden ponderar de un modo diverso. El listado es largo: mal diseño de las reformas, subestimación de la desaceleración de la economía, déficit de conducción política, emergencia de problemas de transparencia y corrupción. Y suma y sigue.

Pero lo que no es normal es el comportamiento de la dirigencia oficialista. Es primera vez que asistimos a un espectáculo que mezcla tan abiertamente lo dramático con lo patético. En pocos días hemos escuchado a un presidente de partido (PDC), Jorge Pizarro, hablar de las “confusiones” de la Mandataria, mientras un ex presidente del mismo partido, Ignacio Walker, apuntaba a la existencia de “liderazgos no presidenciales” y el presidente de otro partido (PR), Ernesto Velasco, declaraba que “lo único que los une es estar en el gobierno”. Para no ser menos, el último ministro del Interior del primer gobierno de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez, advertía sobre la imposibilidad de proyectar la coalición más allá de este gobierno. Esas y otras intervenciones de días recientes tienen en común el hecho que deliberada o involuntariamente afectan la autoridad presidencial.

**El síndrome del “lame duck” podría ocurrir de manera muy prematura. La dirigencia de la Nueva Mayoría debe asumir su responsabilidad.**

**Carlos Ominami**  
Economista



El contraste con los comportamientos en el periodo anterior a las elecciones de 2013 no puede ser más brutal. Fue una época en que lo único que se escuchaba eran alabanzas y los dirigentes se peleaban para situarse en la cercanía de quien se sabía con certeza era la futura Presidenta de Chile.

El debilitamiento continuo de la solidaridad al interior de la coalición de gobierno no puede seguir. Si la dirigencia no se pone seria, las reformas pueden terminar naufragando y el gobierno condenarse a una espera triste del fin de su mandato.

El conocido síndrome del *lame duck*, del cual ningún Presidente consigne sustraerse completamente, podría producirse en Chile de manera muy prematura.

La dirigencia política de la Nueva Mayoría tiene que asumir su responsabilidad en la puesta en práctica de una estrategia que fue extremadamente eficiente en el plano electoral, pero muy defectuosa en cuanto a la preparación de la acción gubernamental. El rasgo característico de las definiciones que se adoptaron en la campaña fue la ambigüedad. Deliberadamente se optó por no entrar en precisiones que pudieran abrir espacio a disputas dentro de la coalición. La ambigüedad fue una estrategia. Y a ella se plegó el conjunto de la dirigencia. En ese momento no se escuchó en su interior ninguna voz disonante que advirtiera que lo que podía ser bueno para ganar elecciones, podría ser malo para gobernar.

En estos tiempos difíciles hay que ser serios y no eludir las responsabilidades.

### ESPACIO ABIERTO

## Remuneraciones en el Estado

**Salvador Valdés Amaya Fraile**

Investigadores de Clapes-UC

LA OPINION pública exige frenar el uso del Estado para dar sueldos excesivos a los operadores políticos. Proponemos potenciar la capacidad de la Contraloría para frenar esta mala práctica, partiendo con el 5% mayor de los sueldos. Proponemos tipificar como “remuneraciones desproporcionadas” a aquellas que sean 2, 3 y 5 veces mayores

que las que otros empleadores, públicos y privados, pagan a personas con competencias y experiencia similares, tomando en cuenta la variabilidad de sueldos. En el sector público ha sido fácil eludir los frenos que existen hoy y ejemplos sobran en distintos gobiernos. Por ejemplo, hace pocos meses se difundió el caso del pariente de un ministro que pasó de ganar un sueldo de \$ 800 mil al mes en un municipio, a \$ 3,9 millones al mes en un ministerio, en un puesto a honorarios creado especialmente. Estas fallas de probidad en organismos del Estado también inciden sobre el financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos. En efecto, cuando la autoridad de un organismo público es también un político activo, que busca financiar una campaña, la ausencia de controles eficaces puede tentarlo a crear remuneraciones excesivas para sus “operadores políticos”, es decir, para personas vinculadas con su facción política que le devolverán el favor de alguna forma útil. Así, la desproporción en las remuneraciones es una forma de “financia-

miento estatal irregular” de la política, que abusa de los tributos de todos dirigiéndolos de modo ilegítimo hacia una de las opciones. Además, esta extracción ilegal de recursos del Estado es ocultada a la ciudadanía. En principio, la Contraloría General es el organismo idóneo para fiscalizar y reprimir estos abusos, porque goza de amplios grados de autonomía del gobierno de turno, ha desarrollado una cultura de defensa de la probidad, cuenta con procedimientos que respetan el debido proceso y porque ya tiene toda la información sobre remuneraciones y honorarios del sector público. También tiene un Tribunal de Cuentas especializado en conflictos análogos, que podría establecer tipificaciones para profesiones específicas. Proponemos dirigir el fortalecimiento de la Contraloría en este ámbito hacia fiscalizar el 5% de puestos o funciones con mayores remuneraciones u honorarios en cada organismo, excluyendo a subsecretarios, ministros y parlamentarios. Estos son los puestos donde los abusos pueden ser mayores, y

donde tienen mayor repercusión para el organismo público y las campañas. El potenciar a la Contraloría también elevaría la eficacia del sistema de Alta Dirección Pública, eximiendo a los altos directivos titulares, que son los únicos cuyos sueldos han pasado el filtro de la competencia. Otra ventaja es liberar a los funcionarios cuyos sueldos están en el restante 95%, de jefes de facto que no tienen competencias para esa función. Además, la gestión del personal a nivel de cada organismo público sería más eficaz. Hace poco presentamos a la Comisión especial del Senado para proyectos de Probidad y Transparencia, un borrador de proyecto de ley que potenciaría a la Contraloría General de la República del modo indicado. En el Senado argumentamos que después de sus últimas modernizaciones, la Contraloría está en condiciones de acometer eficazmente este desafío. ¿Quién se opondría a avanzar de inmediato en este desafío? Basta sumar estas medidas a las de probidad y transparencia que ha propuesto el Ejecutivo al Congreso.